ROMPIENDO BARRERAS DESDE LO JUDICIAL: LAS SENTENCIAS DE LECTURA FÁCIL¹

BREAKING BARRIERS FROM A JUDICIAL PERSPECTIVE: EASY-TO-READ JUDGEMENTS

■ LIC. MELISSA DE LA CARIDAD ALAYO HECHAVARRÍA

Jueza profesional, Tribunal Municipal Popular de Boyeros, Cuba

<https://orcid.org/0009-0001-5769-7203>

melissac@tsp.gb.cu

■ LIC. ALBERTO GARCÍA NODAL

Auxiliar de Notaría, Notaría de Don Emilio Leal Labrador, Madrid, España

<https://orcid.org/0000-0002-4076-5273>

albertonodal@gmail.com

Resumen

La confección de sentencias en formato de lectura fácil es una cuestión novedosa en la práctica y doctrina del Derecho procesal, que ha ganado seguidores y detractores. A este debate sobreviene la necesidad de diseñar un modelo procesal equilibrado en el que el juez sea capaz de ajustar los procedimientos, lo que debe significar dotarlo de potestades en los órdenes formal y material que llenen de contenido la función jurisdiccional, de modo que él cuente con herramientas procesales para perseguir, desde una postura imparcial e independiente, la realización de la justicia. La redacción de sentencias en dicha forma se presenta como una garantía de la tutela judicial efectiva de los derechos ciudadanos. Conforme a tales presupuestos, aparece la institución en estudio en las normas proce-

¹ El presente texto se origina en los estudios que realiza la autora, como parte de la primera edición de la Maestría en Derecho judicial, desarrollada, de conjunto, entre la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana y el Tribunal Supremo Popular.

sales. La mirada a los ordenamientos foráneos indica puntos de contacto con la legislación cubana, en la que la figura de un juez, que ponga todos sus poderes en función de ajustar procesalmente la impartición de justicia, continúa siendo un reto, al que se acerca el presente trabajo con el objetivo de realizar propuestas para perfeccionar su regulación y estimular su empleo en la práctica judicial nacional.

Palabras clave: Sentencias de lectura fácil; personas en situación de vulnerabilidad; juez; acceso a la justicia; tutela judicial efectiva.

Abstract

The preparation of judgments in an easy-to-read format is a novel issue in the practice and doctrine of procedural law that has gained followers and detractors. This debate has given rise to the need to design a balanced procedural model in which the judge is capable of adjusting procedures, which should mean providing him with powers in the formal and material order that fill the jurisdictional function with content, so that he has the procedural tools to pursue, from an impartial and independent stance, the realisation of justice. The drafting of judgments in this form is presented as a guarantee of the effective judicial protection of citizens' rights. In accordance with these assumptions, the institution under study appears in the procedural norms. A look at foreign legal systems indicates points of contact with Cuban legislation, in which the figure of a judge who uses all his or her powers to procedurally adjust the administration of justice continues to be a challenge, which this paper approaches with the aim of making proposals to perfect its regulation and stimulate its use in national judicial practice.

Keywords: *Easy-to-read judgments; people in vulnerable situations; judge; access to justice; effective judicial protection.*

Sumario

I. Introducción; II. Juez y tutela efectiva: alabanzas al activismo judicial; III. Acceso a la justicia de las personas en situación de vul-

nerabilidad; IV. Contexto comparado; V. Pertinencia jurídica para Cuba; VI. Pautas metodológicas; VII. Conclusiones; VIII. Referencias.

I. INTRODUCCIÓN

Comunicar en códigos que se ajusten a las necesidades de los receptores es la pretensión esencial de las sentencias de lectura fácil (SLF), institución en cuyo centro se encuentran el juez y su responsabilidad de ofrecer tutela efectiva a todos los ciudadanos. El abordaje teórico deviene uno de los aspectos más tratados desde la doctrina en el Derecho procesal civil. El tema destaca por su novedad y su escaso tratamiento legal. De lo anterior, se desprende la relevancia del estudio, encaminado a la defensa de un juez activo, que ponga todos sus poderes en función de ajustar, procesalmente, la impartición de justicia. Asimismo, su utilidad deriva de la sistematización de las posturas existentes en la temática, el análisis de su diseño en las normas adjetivas cubanas y la propuesta de pautas concretas para la redacción de resoluciones judiciales ajustadas a la capacidad progresiva de las personas que intervengan en los procesos y, por esa razón, las requieran.

El desuso de las SLF en la práctica forense lacera la tutela judicial efectiva (TJE) de las personas en situación de vulnerabilidad (PSV) por razón de la edad y la capacidad.

Tal escenario pudiera transformarse, de existir una metodología que coadyuvase a la utilización de ese instrumento, a lo cual se encamina el trabajo que se presenta, en el que se procura fundamentar las pautas que han de tenerse en cuenta al efecto. Para lograrlo, será necesario:

- Sistematizar las posiciones teóricas y tendencias normativas en las que descansa la posibilidad de dictar SLF y su impacto en la TJE de los derechos.
- Analizar los presupuestos jurídicos y prácticos para la reconfiguración del marco ordenador de las SLF en Cuba.
- Diseñar una metodología para la redacción de las SLF, dirigidas a PSV por razón de la edad y la capacidad.

La realización de los propósitos antedichos se vale de los métodos jurídico-doctrinal, jurídico-comparado e histórico-jurídico, los que hacen posible el análisis y la sistematización de contenidos centrales, tales como los poderes del juez, la TJE y las SLF; la evaluación de legislación constitucional, sustantiva y procesal extranjera, para dotar de referentes al marco investigativo; y la determinación de los fundamentos, las tendencias y el estado actual de la institución examinada en el texto supremo y la ley procesal cubana vigentes.

II. JUEZ Y TUTELA EFECTIVA: ALABANZAS AL ACTIVISMO JUDICIAL

Al abordar las facultades de los jueces para el desempeño de su función de dirimir conflictos resulta ineludible la referencia a la jurisdicción que, como categoría de la Teoría general del proceso, ha sido comprendida desde una perspectiva tripartita: función estatal, garantía constitucional y poder-deber. En la segunda de estas aristas se concentra la presente valoración, pues la función jurisdiccional, además de manifestarse como actividad del Estado, dirigida a solucionar las diferencias que se establecen en el ámbito de la impartición de justicia, deriva en un conjunto de potestades que le asisten al juez, cual garante de la TJE de los derechos ciudadanos y el debido proceso. Por otro lado, entender la jurisdicción como garantía constitucional implica, ante todo, otorgar al juez un rol en el que los poderes procesales e instructorios, amparados por la letra mayor, desempeñan un papel fundamental. Por esa razón, no existe regulación más acertada y protectoria que la posibilidad de los ciudadanos de acudir a los tribunales a ejercer la acción, ante la vulneración de sus derechos y libertades individuales, acogidos por la Carta Magna, y en defensa de ellos.

Los poderes otorgados al juez llenan de contenido el ejercicio de la actividad jurisdiccional judicial, el que debe caracterizarse por el respeto absoluto a los derechos y las garantías de las partes. La calidad de la decisión dependerá, en gran medida, de las facultades de dirección del proceso —formales y materiales—, conferidas al juez.

La función jurisdiccional judicial que es, a la vez, poder-deber y garantía de las partes, dota al juzgador de potestades que le permiten conducir el proceso eficientemente y alcanzar la justicia en sus fallos. Como

poderes formales, pueden entenderse los vinculados con el desarrollo e impulso procesal, o sea, los que señalan el control de la regularidad técnica de los actos procesales y están ligados a la gestión de los tiempos, a fin de conducir, sin dilaciones, a la justa solución del conflicto. Sin embargo, la concesión de la dirección formal del proceso no agota la activa participación defendida por la *publicización*, corriente doctrinal —también conocida como *neoprocesalismo*— que nace de la concepción de Franz Klein e instaura un modelo de juez nuevo (Fairén Guillén, 1955), no circunscrito, únicamente, a la función de pronunciar la sentencia, sino facultado para administrar y gestionar el proceso de principio a fin, con poderes discrecionales que le permiten dirigir el debate, como representante calificado del bien común, con la finalidad de satisfacer, conjuntamente, los intereses privados en pugna y el interés del Estado.

Contestes con ello se muestran Cappelletti y Garth (1972, p. 125), cuando aseveran que no es suficiente posibilitar al juzgador la determinación de los límites esenciales de la acción (subjettivos, objetivos y causales) y la decisión, sino que debe asignársele, también, la dirección material del proceso. Esta es la que respalda y justifica su intromisión en asuntos reservados, originalmente, a las partes, como paliativo al principio dispositivo, que son los conocidos y polémicos poderes instructorios (Pérez Gutiérrez y Hierro Sánchez, 2019, p. 43). Por poderes materiales o probatorios, pueden entenderse los circunscritos a la aportación al proceso de dos de sus elementos fundamentales, a saber, los hechos y las pruebas. Como indica Fairén Guillén (1955, p. 313), el poder de dirección procesal del juez se manifiesta mediante el auxilio que este presta a las partes en las alegaciones y actividades que han de desplegar para conseguir el objeto del proceso.

En el escenario jurisdiccional vislumbrado, con poderes contemplados para que el juez cumpla con su rol de dirigir el proceso, no solo en sentido formal, sino materialmente, se impone un cambio de actuación en las formas de gestionar los tiempos procesales e impulsar los asuntos y, también, en el protagonismo que deben tener los juzgadores en el momento de comunicar los fallos judiciales.

Las manifestaciones de pasividad no pueden tener espacio en un proceso como el cubano, que necesita de un nuevo modelo de juez, con una mentalidad distinta, dispuesto a desmontar arraigados procedimientos y poner todos los poderes de los que dispone a favor de la legalidad,

los derechos de las partes y la justicia, aun más cuando, por las características de la sociedad actual, se incrementan los sujetos de las decisiones judiciales que se encuentran en situación de vulnerabilidad, bien sea por razón de su edad o de su capacidad de discernimiento, grupos a los que es necesario dirigir la mirada en clave de comunicación procesal de la resolución judicial definitiva, que es lo mismo que enrumbar el debate hacia la fácil lectura y las sentencias en este formato como ajuste de procedimiento.

III. ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

Con la aparición del Estado y, al unísono, del Derecho, la función de resolver los conflictos entre particulares se desplazó, de las manos de los justiciables hacia los representantes del poder, quienes concentraron la potestad de aplicar las reglas consuetudinarias para imponer sus decisiones sobre los particulares. Ello, necesariamente, implicó la actividad estatal encaminada a tal fin: la impartición de justicia, mediante la aplicación del Derecho abstracto al caso concreto y, a su vez, la necesidad de estructurar un sistema de órganos que llevaran a cabo tal encomienda (Fernández Bulté, 2008, pp. 35-36).

Desde la primigenia justicia monárquica hasta el esplendor de las asambleas populares como órganos judiciales, aun con el surgimiento de los tribunales y la justicia popular, uno de los principales dilemas de la función jurisdiccional era el acceso universal a la justicia —y continúa siéndolo—, tal como aseveraron Cappelletti y Garth (1983).

En los prolegómenos de las civilizaciones antiguas, el derecho a accionar era un privilegio de pocos; quienes tenían el estatus civil (ciudadanos romanos, eupátridas, brahmanes) estaban legitimados para pedir de la justicia una decisión sobre su conflicto (Fernández Bulté, 2008, p. 42), amparados por normas clasistas y que, por lo general, favorecían a estos grupos poderosos en política, economía o religión. La panorámica no cambió con el decurso del tiempo y, aun llegada la modernidad, las ideas iusfilosóficas imperantes tendieron al enfoque individualista de los derechos y su ejercicio. En este contexto, el acceso a la justicia se redujo, drásticamente, al derecho a accionar que, visto desde una concepción iusnaturalista, estaba desprovisto de garantías materiales para su ejer-

cicio universal. El derecho se les reconocía a las personas, pero en un ámbito formal, sin tener en cuenta las reales barreras que existían en la sociedad, más allá de un proceso permeado de una idea de igualdad ante la ley.

Fue a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando los derechos, entre ellos el de acceso universal a la justicia, cobraron una visión social y colectiva. La Declaración universal de derechos humanos, paradigma jurídico en el plano internacional, estipuló, en su Artículo 10, que toda persona ha de contar con un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos violatorios de los derechos fundamentales reconocidos, constitucional o legalmente. Desde ese reconocimiento, el acceso a la justicia ha encontrado asidero en diversos instrumentos de protección internacional y en la mayoría de las constituciones de posguerra.

Por otra parte, en la contemporaneidad y como consecuencia de la globalización, se han marcado aun más las brechas entre las personas, y los esfuerzos de las organizaciones defensoras de los derechos humanos se han encaminado a establecer pautas y regulaciones para la salvaguarda diferenciada de los derechos y las garantías procesales de las personas a las que se ha llamado *en situación de vulnerabilidad*.

Las PSV son aquellas que, por razón de su edad, capacidad intelectual, origen étnico, procedencia social, orientación sexual, identidad de género, situación de salud o cualquier otra distinción, no tienen la misma capacidad de respuesta ante la dinámica social. En la definición de estos grupos, es necesario considerar, junto a la dimensión jurídica, la histórica y la social, ya que se trata, casi siempre, de personas que han sido, persistentemente, objeto de alguna forma de discriminación o afectación de sus derechos y que, por lo tanto, requieren de políticas activas para garantizar, mediante el reconocimiento y respeto de su identidad, condición y necesidades particulares, el goce igualitario de derechos.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, México, considera que

los *grupos en situación de vulnerabilidad* son aquellos que[,] debido al menosprecio generalizado de alguna condición específica que comparten, a un prejuicio social erigido en torno a ellos o por una situación histórica de opresión o injusticia, se

ven afectados sistemáticamente en el disfrute y ejercicio de sus derechos fundamentales. [...] El concepto de vulnerabilidad se aplica a aquellos sectores o grupos de la población que[,] por su condición de edad, sexo, estado civil, origen étnico o cualquier otro[,] se encuentran en condición de riesgo, impidiendo [sic] su incorporación a la vida productiva, el desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar. (2011, s.p.)

Este concepto, tradicionalmente usado, de *vulnerabilidad* se asocia al de debilidad, incapacidad o riesgo, y constituye una identidad devaluada del grupo al que califica, cuya discriminación refuerza. Por ello, resulta más adecuada la expresión *grupos en situación de vulnerabilidad* (GSV), que posee carácter dinámico y modificable de una situación, para transformarla.

La expresión GSV designa a aquellos grupos de personas o sectores de la población que, por razones inherentes a su identidad o condición y por acción u omisión de los organismos del Estado, se ven privados del pleno goce y ejercicio de sus derechos fundamentales, y de la atención y satisfacción de sus necesidades específicas.

Para ellos, en el ámbito jurídico procesal, también, se han dispuesto regulaciones con la misión de garantizar sus derechos, sobre la base del principio de equidad, en contraposición con la sacrosanta igualdad ante la ley. Es por esta razón que

en la evolución del derecho internacional de los derechos humanos, [se ha] resaltado el reconocimiento de los derechos de las personas por parte de los Estados. Asimismo, la comunidad internacional ha efectuado un importante avance admitiendo la existencia de diferencias y particularidades entre las personas, que aun naciendo libres e iguales en dignidad y en derechos requieren de un reconocimiento de su diversidad. (2011, s.p.)

En la Cumbre Judicial Iberoamericana (CJI) de 2008, celebrada en el gigante sudamericano, se generó un conjunto de postulados que han sido denominados como «Reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad», las que resultaron actualizadas 10 años después, en el propio espacio de concertación que, para la ocasión, tuvo sede en Ecuador (CJI, 2024). Este acuerdo multilateral, si bien no es de obligatorio cumplimiento para

sus signatarios, obtiene cierta virtualidad jurídica sobre la base de la buena fe de los Estados que le dieron vida y se constituye como una guía de buenas prácticas para los países de la región en cuanto a tan actual problemática. El objetivo de este acuerdo es garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las PSV, sin discriminación alguna, mediante el conjunto de políticas, medidas, facilidades y apoyos que permitan a dichas personas el pleno goce de los servicios del sistema judicial (López Cabello *et al.*, 2011, p. 280).

En este sentido, la regla 25 (CJI, 2024, s.p.) establece que se promoverán las condiciones necesarias para que la tutela judicial de los derechos reconocidos por el ordenamiento sea efectiva, por medio de aquellas medidas que mejor se adapten a cada condición de vulnerabilidad; más adelante, se proponen, entre otras acciones, la promoción de la asistencia técnico-jurídica de calidad, especializada y gratuita, el derecho a un intérprete, la simplificación de las normas adjetivas en cuanto a requisitos procesales y supuestos de legitimación, el impulso de la oralidad como vía para garantizar la celeridad y la economía procesal, y el desarrollo de medios alternativos de solución de conflictos, todo ello en un loable y necesario esfuerzo por ajustar los procedimientos judiciales a las necesidades de las PSV, concepto que deja claro la regla tercera.

La regla 60 (CJI, 2024, s.p.) pauta que las resoluciones judiciales emplearán términos y construcciones sintácticas sencillos, sin perjuicio de su rigor técnico, lo que, si bien refleja el interés por disminuir el lenguaje endógeno de los juristas, en pos de una mayor asequibilidad del servicio judicial, resulta insuficiente para la cabal comprensión de la resolución por los destinatarios, cuando su causa de vulnerabilidad es por razón de edad o discapacidad. A partir de la regla 61 (CJI, 2024, s.p.), se exhorta a los sistemas judiciales a implementar las medidas pertinentes para que las PSV puedan comprender las actuaciones judiciales orales en las que intervengan.

La adopción de este instrumento fue objeto del Acuerdo No. 72, del CG-TSP, de 27 de marzo de 2012, mediante el que se asumió el compromiso de promover la divulgación, el conocimiento y la aplicación de las Reglas, en lo pertinente, en el ejercicio de la función de impartir justicia, prueba de la intención estatal de proteger el derecho en examen.

IV. CONTEXTO COMPARADO

Las resoluciones judiciales definitivas serán más legítimas, si contienen un espacio dedicado a quien va a estar afectado por la decisión que se adopta. Esta es, precisamente, la premisa sobre la que se erigen las SLF, a cuyo concepto y utilización en contextos judiciales extranjeros se acercará este epígrafe.

La lectura *fácil* surgió como una estrategia de fomento a la lectura, especialmente dirigida a personas sin el hábito de leer o imposibilitadas de hacerlo. Como herramienta de facilitación, pretende garantizar el acceso a la información y la cultura de todas las personas, con independencia de sus capacidades. Como indica García Muñoz (2011),

no sólo es un derecho, sino que permite el ejercicio de otros, como el de participación, para tener la opción de influir en decisiones que pueden ser importantes para su vida, así como la posibilidad de desenvolvimiento autónomo de cualquier persona en un entorno como el actual que produce la mayor cantidad de texto de la historia, tanto en soporte físico como en digital. (p. 21)

Al referenciar los hitos de la lectura fácil, como formato para la redacción de sentencias, hay que partir de su nacimiento, previo a su uso cual apoyo en el sistema judicial. Este puede encontrarse en la Suecia de 1968, coincidente con la creación y publicación del primer libro con tal conformación, auspiciado por la Agencia Sueca de Educación; posterior a ello, en 1997, se promulgaron las Directrices para materiales de lectura fácil de la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas, que se revisarían en 2010. Estas marcaron un jalón en la uniformidad de las pautas para la redacción de documentos y sentaron las bases sobre las que se erigieron la Constitución europea de 2005 y otros textos, como mecanismos para garantizar el acceso de todos a las leyes (Poblete y Fuenzalida, 2018, p. 125).

En España, la historia de la lectura fácil se remonta a 1993, con el nacimiento de la organización «Plena Inclusión Asturias», vinculada a la protección de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, y que hasta hoy ha desempeñado un excelente trabajo en la atención

a grupos sociales vulnerables. Ello responde al cumplimiento de los compromisos impuestos por la Carta Magna de esa nación que, en su Artículo 49, reformulado, expresa el compromiso estatal con la protección de las personas con discapacidad (2018, p. 41).

En la 54.^a Asamblea de la OMS, celebrada en mayo del 2001, se aprobó la actual Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud, que persigue, entre sus objetivos primordiales, proporcionar un lenguaje que —a través de estándares unificados— sirva de referencia para la descripción de la salud y los estados relacionados con esta. La propuesta abandona el concepto de *minusvalía* y acoge el término genérico de *discapacidad*, que engloba todas las limitaciones, los déficits y las restricciones en la participación, así como los aspectos negativos del contacto entre una persona con una condición de salud y los factores ambientales. El ordenamiento jurídico español se hace eco de este nuevo enfoque y adopta el concepto mencionado.

La primera sentencia hispana en formato de lectura fácil se dictó en la Audiencia Provincial de Madrid en 2018, en un procedimiento asociado a la materia penal, contrario a las primeras experiencias que serán comentadas posteriormente, vinculadas al Derecho civil (Sanz, 2021, p. 2). En el caso, la víctima de estafa era una persona con discapacidad intelectual y recibió la sentencia en la que se aplicó este método de comprensión más sencillo. Ello sirvió de base para que el Consejo General del Poder Judicial y la organización Plena Inclusión Asturias rubricaran un convenio con el fin de garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, el que ha dado frutos, muestra de lo cual es la existencia en el país de 23 sentencias en tal formato, registradas durante el propio año.

Igualmente emblemática es la experiencia mexicana (Poblete y Fuenzalida, 2018, pp. 127-130). En 2011, Ricardo Adair Coronel Robles —diagnosticado con síndrome de Asperger desde 2007—, sus padres, la Confederación Mexicana de Organizaciones a favor de la Persona con Discapacidad Intelectual y el Centro Estratégico de Impacto Social promovieron, ante el juez de primera instancia, una demanda de amparo para que se declararan inconstitucionales los artículos 23 y 450 del Código civil del Distrito Federal, que regulan el juicio de interdicción —una figura legal que cancela la posibilidad de tomar decisiones propias a quienes se encuentran en ese caso, pues ellas

deben ser asumidas por sus tutores. Se alegó que el referido juicio y, por ende, la tutela, restringían, casi por completo, la capacidad de Ricardo para hacer valer sus derechos por sí mismo e inhibían al máximo el goce de su personalidad, pues él había sido declarado incapaz en el expediente 260/2008, por el juez trigésimo quinto de lo familiar del Distrito Federal, y, en consecuencia, sus padres habían sido designados como tutores.

El juez de primera instancia desestimó el amparo, argumentando que el régimen de tutela en el Distrito Federal satisfacía los estándares internacionales y, en ningún caso, ocasionaba desigualdad o trato discriminatorio. La decisión fue apelada ante el tribunal de segunda instancia. Debido a la importancia del asunto, este fue atraído para su conocimiento por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que debió determinar si el declarar la incapacidad legal de una persona resultaba contrario a la Constitución mexicana y la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad (CIDPD), o no. La sentencia 159/2013, contentiva de la solución del caso, consideró que el juicio de interdicción y el régimen de tutela limitan el derecho a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y, por tanto, ambas figuras contravienen los estándares internacionales reconocidos por la citada convención.

La resolución judicial sentó jurisprudencia en materia de garantías de las PSV, pues reconoció el derecho de un joven con discapacidad intelectual a decidir sobre su propia vida y le comunicó la decisión mediante el formato de lectura fácil. Esta fue la primera vez que se utilizó el procedimiento en la nación azteca, con base en las Normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, de 4 de marzo de 1994, aprobadas por la Asamblea General de la ONU, que, aun cuando carecen de fuerza vinculante, resumen 22 buenas prácticas, como expresión del compromiso de los países signatarios de tomar medidas para la satisfacción social y el alcance de oportunidades de las personas con discapacidad. El Poder Judicial Federal de México, a través del Consejo de la Judicatura Federal, escribió sus reglas para uniformar el actuar de la persona responsable de la confección de las resoluciones de lectura simple.

En el caso de Perú, Edwin Romel Béjar Rojas, juez del Tercer Juzgado de Familia de Cusco, conoció una demanda de interdicción civil y nombramiento de curador, presentada por una madre contra sus hijos de 49 y 47 años de edad, respectivamente, ambos con diagnóstico de esquizofrenia paranoide, en la que recayó una resolución judicial paradigmática y revolucionaria para el contexto del momento, pues se reconoció la capacidad jurídica de los demandados en igualdad de condiciones con las demás personas y se les hizo saber la decisión en el formato de lectura fácil (Poblete y Fuenzalida, 2018, p. 130). De esta forma, se cumplía con el mandato de la Constitución política de 1993, en cuyo Artículo 7 se plantea que la persona incapacitada a causa de una deficiencia física o mental, para velar por sí misma, tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad, dado que el indicado método, por su redacción sencilla y clara, garantizaba la comprensión y el entendimiento de la decisión por los destinatarios.

No obstante, continúa siendo un reto para ese país que se armonice el ordenamiento jurídico vigente a lo dispuesto en el Artículo 12 de la CIDPD, a fin de que, en los procesos de interdicción civil y los que atañan a las personas con discapacidad, las actuaciones judiciales se adecuen de forma expresa, sobre todo con términos sencillos, en función del grado de incapacidad que se haya probado, para evitar posibles excesos contra la voluntad o el mejor interés de estas personas.

V. PERTINENCIA JURÍDICA PARA CUBA

En este punto del debate, cabría la posibilidad de cuestionar si, usando este ajuste procesal, como forma de inclusión y TJE, se garantizan un proceso judicial más eficiente y un resultado más justo. La contestación debe partir de los razonamientos sobre la categoría económica que hiciera Bullard (2019, p. 27), citando al óptimo paretiano, al plantear que una situación es más eficiente que la anterior, cuando una persona mejora sin empeorar la situación de otra, todo lo que procede en el presente caso, en tanto dar a conocer el resultado del proceso al destinatario en situación de vulnerabilidad, en una forma accesible a su condición, no genera perjuicio alguno para los intervinientes del asunto y sí beneficia, en gran medida, la comprensión del contenido de la sentencia, facilita la ejecución del

fallo y satisface el mandato constitucional de proteger los derechos e intereses legítimos de todas las personas, devenido garantía de la función judicial.

Lo anterior refuerza la idea de que lograr la eficiencia es un objetivo social porque ella genera mayor bienestar agregado. Al derecho le compete ayudar a alcanzar una situación eficiente, contribuir con reglas que muevan a situaciones cada vez mejores (Bullard, 2019, p. 31). La lectura fácil encuentra asidero jurídico en la Constitución cubana de 2019, sobre la base de un conglomerado de preceptos que la Carta Magna reconoce como derechos o garantías de las personas y en los que se sustentaría la necesidad de tal deferencia judicial para el efectivo ejercicio de los primeros y la virtualidad de las segundas.

En primer orden, el Artículo 40 constitucional (2019, p. 79) eleva la dignidad humana a valor supremo para el reconocimiento de los derechos y deberes, por lo que se debe entender una obligación del Estado garantizar el pleno acceso a la justicia de todas las personas; ello, además, en atención al principio de no discriminación establecido en el Artículo 42 del propio texto (2019, p. 79), en el que se recoge la igualdad ante la ley, el recibimiento de la misma protección e igual trato de las autoridades, y el goce de idénticos derechos, libertades y oportunidades, sin distinción alguna que resulte lesiva a la dignidad humana.

Especial relevancia recae en el postulado del Artículo 92 de la ley de leyes (2019, p. 86), en tanto este enarbola, como garantía de la TJE de los derechos y legítimos intereses de las personas, el acceso a la justicia que —como se ha apuntado con anterioridad— no se agota con el ejercicio de la acción, sino que implica el respeto a las reglas del debido proceso y la ejecución eficaz de las decisiones judiciales. A tono con esta interpretación, cualquier acto del Estado encaminado a disminuir las brechas entre los justiciables, y a asegurar el efectivo ejercicio del acceso a la justicia, resulta una obligación, con sustento en el reconocimiento constitucional de este, de naturaleza instrumental, por ser garantía del resto de los derechos justiciables. De ello no escapa la redacción de SLF para aquellas personas que, por su condición de vulnerabilidad, puedan resultar lesionadas en sus derechos por la notificación de una resolución judicial, recaída

en un asunto que les interesa y que les resulta incomprensible, al incumplir los estándares de asequibilidad y sencillez que se requieren para que ellas puedan entenderla, sin mediación de un letrado que interprete los tecnicismos jurídicos, fundamentos, motivos y efectos de dicha resolución.

Asimismo, el inciso a) del Artículo 94 de la Constitución de 2019 (p. 79) establece que toda persona, como garantía a su seguridad jurídica, disfruta de un debido proceso en el que goza de igualdad de oportunidades al intervenir como parte, lo que contrasta con los preceptos establecidos para niños, adolescentes y personas en situación de discapacidad —artículos 86 y 89 (2019, p. 78)— teniendo en cuenta que, si bien en algunos casos no concurren por sí mismos al proceso, son partes de este y, en consecuencia, darles un tratamiento diferenciado es, en definitiva, cumplir con el mandato constitucional de garantizarles la igualdad de oportunidades en el proceso judicial.

El Código de procesos (CPR) regula el proceso sumario sobre el ejercicio de la capacidad jurídica y la provisión de apoyos y salvaguardas, único espacio en el que la legislación procesal vigente hace referencia a las SLF (2021, pp. 3980-3981). El Artículo 569 (2021, p. 3988) indica que este método debe ser utilizado para la comunicación de lo resuelto a la PSV por razón de su capacidad, a la vez que ofrece pautas procedimentales y de contenido para la redacción, e indica la pertinencia de utilizar un lenguaje sencillo y claro que se atempere, siempre, a las necesidades de la persona sobre la que recae el asunto. Estará en manos de quien confeccione la resolución el ajustar estos requerimientos al nivel evolutivo y la comprensión del mundo de aquel a quien vaya dirigida la sentencia y, en consecuencia, el contenido de sus pronunciamientos variará en cuanto a su complejidad. A esta actuación conmina la propia norma procesal en su Artículo 9 (2021, p. 3978).

La regulación de la ley de trámites penales —artículos 138-142 (2021, pp. 4122-4123)— reconoce, expresamente, el derecho de acceso a la justicia de la víctima o el perjudicado; por imperio del Artículo 139, esta(e) es la persona natural o jurídica que, a consecuencia de un delito, haya sufrido un daño físico, psíquico, moral o patrimonial, lo cual no descarta la posibilidad de que se trate de una persona menor de edad o en situación de discapacidad, muy a pesar de que tal

condición se extiende, en esos casos, a los familiares, según se establece en el inciso b) del 140, los que, si bien comparecen al proceso en representación de aquella, no excluyen su cualidad de afectada directa del delito, como establece el inciso a) del mismo precepto. En consecuencia, y con particular atención a las regulaciones de los artículos 141, inciso k), y 142.2, esta víctima tiene derecho a ser informada de los resultados del proceso y notificada de las resoluciones que se dicten, y a agotar los medios de impugnación que la ley franquea, razón que amerita, entonces, un pensamiento de los jueces sobre la pertinencia de que, para satisfacer de manera eficaz dichos derechos, deba redactarse, en estos especiales supuestos, una sentencia que sea mucho más asequible, directa y comprensible para su destinatario.

Por su parte, la Instrucción No. 265 del CG-TSP (2022, pp. 717-725) resultó un paso de avance para conseguir una resolución que se adecue a una lectura ciudadana, mas no cumple con lo requerido en materia de fácil lectura; ni siquiera contempla la metodología única para ese tipo de resolución que se mandata por el tenor del ya precitado Artículo 569 del CPR. Con la pretensión de disminuir estas brechas, la Instrucción No. 278 del CG-TSP (2022, pp. 35-42), en su pronunciamiento vigésimo segundo, ofreció pautas de redacción para la segunda sentencia a confeccionar en los casos en que se resuelva sobre la provisión de apoyos y salvaguardas, o ajustes razonables, para la PSV. Los criterios se encaminan a evocar la condición de esta como sujeto procesal y titular de derechos subjetivos, al tiempo que convocan a respetar la dignidad plena de los destinatarios de la resolución en formato de lectura fácil, con insistencia en la necesidad de la formulación de su contenido de manera sencilla, sin utilizar el lenguaje jurídico, con expresiones en sentido positivo que supriman cualquier indicio de discriminación.

A pesar de que, como se ha demostrado, esta práctica resulta pertinente y compatible con el ordenamiento patrio, ella no ha logrado hacerse cotidiana en la práctica judicial cubana, a lo que ha coadyuvado la inexistencia de pautas que homogenicen su redacción, a cuyo acercamiento se enrumba el siguiente epígrafe.

VI. PAUTAS METODOLÓGICAS

La voluntad de acercarse a los códigos comunicativos necesarios, para lograr que una persona menor de edad o con discapacidad comprenda lo dispuesto judicialmente, debe pasar por la evaluación de las más claras herramientas de redacción y estilo, las que se ofrecen luego de la sistematización de los criterios para el perfeccionamiento de los actos procesales de comunicación escrita que constituyen las SLF.

Según afirma Durán Alonso (2023, p. 189), el lenguaje jurídico proporciona una comunicación eficaz entre operadores jurídicos; como contrapartida, también puede suponer una barrera comunicacional. Las SLF pueden devenir garantía de accesibilidad al proceso y fracturar aquel obstáculo. Ese fin se persigue tras la identificación de defectos comunicativos que pueden atentar contra la formulación simple de las resoluciones judiciales (Ato Alvarado, 2021, pp. 64-65) y van desde la sintaxis inentendible, el uso excesivo de oraciones subordinadas y complejas, hasta el empleo de términos obsoletos. Como remedio, pretender una forma de redacción accesible es la solución más efectiva para garantizar la comprensión del contenido, lo que, si bien debe nacer de la sapiencia natural del redactor, ha de pasar, además, por la asimilación de reglas en el orden sintáctico y estilístico.

Las recomendaciones que serán indicadas toman, como punto de partida, manuales de referencia para la redacción de textos en lectura fácil ciudadana y técnicas de comunicación escrita para la confección de documentos accesibles a personas menores de edad o con discapacidad (Antolín Marsal, s.f.; García Muñoz, 2011; Suárez de los Santos, 2022). Además, beben de las pautas procesales que establecen normas como la CIDPD, el CPR y la Instrucción No. 278 del CG-TSP, al igual que de la consulta de sentencias en este formato que constituyen paradigmas para el mundo judicial.

Las propuestas que se expondrán no buscan agotar toda la metodología para la redacción de SLF, ni mucho menos proyectar un procedimiento para su dictado, sino ofrecer nociones de buenas prácticas para una futura regulación de este tipo de resolución, sin desprenderse del papel protagónico que deberá desempeñar quien las confeccione, a los efectos de realizar un apropiado juicio de discernimiento que permita escoger las mejores formas de comunicar lo resuelto, en atención

a la discapacidad que tenga la persona o las necesidades de comprensión, progresivamente ascendentes, de niños y adolescentes.

En el orden gramatical y sintáctico:

- El punto será el signo ortográfico fundamental para la separación de contenidos. El punto y aparte funcionará como mecanismo para separar párrafos con diferentes ideas. Es preferible el uso del punto en vez de la coma para separar y diferenciar mejor las ideas enlazadas. Se debe suprimir el uso del punto y coma y de los puntos suspensivos.
- Se deben evitar determinados tiempos y modos verbales: futuro, condicional, formas compuestas y subjuntivo.
- Se utilizará, de preferencia, la voz activa, debido a que esta facilita la comprensión de la acción.
- Se evadirá la elisión del sujeto. Se recomienda repetirlo o sustituirlo por un pronombre, para reiterar el protagonista de la acción. Si el referente contextual es claro, será posible la elisión.

En el orden estilístico, se sugiere:

- Emplear oraciones simples, cortas, con la estructura «sujeto + verbo + complementos».
- Prescindir de oraciones complejas (coordinadas o subordinadas).
- Usar formas afirmativas.
- Valerse de palabras sencillas, expresadas de forma simple (vocallos cortos, de uso cotidiano y cercanos al lenguaje hablado que utilice el público objetivo del texto).
- Obviar palabras largas o difíciles de pronunciar.
- Utilizar términos con significado preciso. Evitar las palabras genéricas de significado vacío.
- Reiterar los vocablos para mantener la legibilidad. Es preferible la repetición, para mantener la coherencia en el uso de los términos. Se debe evitar la variación unificando diferentes nombres y formas de referirse a algo.

- Explicar las palabras menos comunes o complejas, por medio de la contextualización, el apoyo en imágenes y la explicación del significado.
- Se pueden utilizar adverbios, pero se deben evitar los terminados en -mente.
- Utilizar siempre el mismo sinónimo. Se pueden emplear antónimos.
- Evitar tecnicismos, jergas y extranjerismos, aunque, si se usan, se debe explicar su significado.
- No usar el lenguaje figurado, las metáforas y los proverbios porque generan confusión.
- Prescindir de conceptos abstractos, y, de emplearlos, ilustrarlos de forma concreta, mediante comparaciones o ejemplos prácticos y de la vida diaria.
- Evitar el uso de números en exceso; ante la necesidad de utilizarlos, es mejor hacerlo sin consignarlos en letras.
- Escribir de un modo concreto, simple y directo, cercano al estilo de conversación. Evitar el simplismo.
- Limitar el número de pautas, ideas y mensajes; seleccionar, de forma precisa, las ideas principales que se quieren transmitir y reflejarlas con claridad.
- Expresar una idea por frase, ser concisos; evitar la introducción de varias ideas o acciones en una oración. Es importante concentrar la información relacionada, pero, si no es posible porque es extensa, se optará por cortarla y ofrecerla por separado, utilizando guías, como encabezamientos.
- Utilizar un lenguaje coherente con la edad y el nivel intelectual del receptor, aunque sin acudir al lenguaje infantilista.
- Proporcionar información relevante y significativa para los lectores. Centrarse en qué información debe adaptarse.
- Dirigirse a los lectores de forma respetuosa, directa y personal, personificar el texto en la medida de lo posible y remarcar los aspectos que pueden resultar más próximos o interesantes para él.

- Eliminar todo tipo de contenido, ideas, vocablos y oraciones innecesarias. Contar solo lo que se necesita saber y dejar fuera lo que no va a utilizar el lector.

VII. CONCLUSIONES

Las brechas que genera la vulnerabilidad por razón de la edad o la capacidad, en los entornos judiciales, puede disminuirse si se recurre a la adaptabilidad del procedimiento a las necesidades de las personas intervinientes en él.

Las SLF constituyen una valiosa herramienta para perseguir ese fin, como garantía de comprensión lectora que asegura la igualdad de oportunidades a los ciudadanos.

Traer esta práctica a los entornos judiciales es un fenómeno de la actualidad procesal y, por ello, ha sido preciso dirigir la mirada a ordenamientos como el mexicano, el ecuatoriano o el español, pioneros en registrar resoluciones en este formato, a fin de encontrar nociones esenciales para perfeccionar su redacción y realizar una propuesta de pautas que fomente el acercamiento de los jueces cubanos a este modo de hacer, que, aunque es compatible con la regulación constitucional y legal de la nación, no ha logrado hacerse cotidiano en el escenario procesal patrio.

La presencia de un juez proactivo, con las herramientas necesarias de redacción y estilo a su disposición, es la clave del éxito, la inclusión y la eficiencia. Toda la regulación y el amparo constitucional y legal que se proporciona a las PSV será letra muerta, si tales disposiciones no son aplicadas por un juez que ponga todas sus facultades y poderes procesales en función de conseguir que cada proceso obtenga la solución más beneficiosa y eficiente, y que la justicia deje de ser más que una aspiración paradigmática. Contar con una metodología que homogenice la redacción de las SLF hace parte de tan loable propósito.

VIII. REFERENCIAS

- Antolín Marsal, R. (s.f) *Manual de lectura fácil y formatos accesibles*. Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades. <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=899>

[78449&url=https://www.iddcconsortium.net/wp-content/uploads/2021/07/Manual-de-lectura-f%25C3%25A1cil-y-formatos-accesibles.f&ved=2ahUKEwjf_8aEx5iKAxUHibAFHbqRLCsQFnoECCwQAQ&usg=AOvVaw1Sa1LNGsGsZT5HIsGDazHw](https://www.iddcconsortium.net/wp-content/uploads/2021/07/Manual-de-lectura-f%25C3%25A1cil-y-formatos-accesibles.f&ved=2ahUKEwjf_8aEx5iKAxUHibAFHbqRLCsQFnoECCwQAQ&usg=AOvVaw1Sa1LNGsGsZT5HIsGDazHw)

- Ato Alvarado, M. E. (Julio-diciembre, 2021). El lenguaje claro y la transparencia de las decisiones judiciales. *Revista Oficial del Poder Judicial*, 13(16), 61-76. <https://doi.org/10.35292/ropj.v13i16.450>
- Bullard González, A. (2019). *Análisis económico del Derecho*. Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Cappelletti, M. y Garth, B. (1972). *La oralidad y las pruebas en el proceso civil*. Ediciones Jurídicas Europa-América.
- Cappelletti, M. y Garth, B. (1983). *El acceso a la justicia* (Amaral, S., trad.). Colegio de Abogados del Departamento Judicial de La Plata.
- Consejo de Gobierno, Tribunal Supremo Popular. (Febrero 1.º, 2022). Instrucción No. 265. *GOR-E*, (13), 717-725. <https://www.gacetaoficial.gob.cu/sites/default/files/goc-2022-ex13.pdf>
- Consejo de Gobierno, Tribunal Supremo Popular. (Febrero 14, 2023). Instrucción No. 278. *GOR-E*, (11), 35-42. <https://www.gacetaoficial.gob.cu/sites/default/files/goc-2023-ex11.pdf>
- Constitución española (ed. conmemorativa del cuadragésimo aniversario). (2018). Cortes Generales.
- Constitución de la República de Cuba. (Abril 10, 2019). *GOR-E*, (5), 69-116.
- Cumbre Judicial Iberoamericana. (2024). Las Reglas de Brasilia. <https://www.cumbrejudicial.org/sites/default/files/2024-02/Documento%205-Edic%C3%B3n%20Reglas%20deBrasilia-Texto%20y%20Comentarios%20de%20Joaqu%C3%ADn%20Delgado%20Mart%C3%ADn.pdf>
- Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León. (2011). Grupos en situación de vulnerabilidad. <https://www.cedhnl.org.mx/imagenes/publicaciones/presentaciones/>

[CEDHNL_VIIseminarioDHS/ModuloII/Grupos-en-situacion-de-vulnerabilidad.pdf](#)

- Durán Alonso, S. (2023). Accesibilidad al proceso y menores de edad: desde la figura del facilitador hasta las resoluciones «de lectura fácil». En Martínez Calvo, J. (Coord.). *La protección jurídica del menor en el Derecho comparado*, 187-203. Prensas.
- Fairén Guillén, V. (1955). *Estudios de Derecho procesal*. Revista de Derecho Privado.
- Fernández Bulté, J. (2008). *Siete milenios de Estado y de Derecho* (t. I). Editorial de Ciencias Sociales.
- García Muñoz, O. (2011). *Lectura fácil: Métodos de redacción y evaluación*. Editorial Real Patronato sobre Discapacidad.
- Ley No. 141, «Código de procesos». (Diciembre 7, 2021). *GOR-O*, (138), 3977-4069.
- Ley No. 143, «Del proceso penal». (Diciembre 7, 2021). *GOR-O*, (140), 4095-4251.
- López Cabello, A., Trovato, M., Griffa, T. y Morales, D. (2016). El acceso a la justicia como una cuestión de derechos humanos. En *Derechos humanos en la Argentina. Informe 2016*, 271-297. <https://www.cels.org.ar/web/wp-content/uploads/2016/12/IA2016-09-acceso-a-la-justicia.pdf>
- Organización de Naciones Unidas. (1994). Normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. <https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/standard-rules-equilization-opportunities-persons-disabilities>
- Pérez Gutiérrez, I. y Hierro Sánchez, L. A. (2019). *La tutela judicial efectiva en el proceso civil*. Leyer.
- Poblete, C. y Fuenzalida González, P. (2018). Una mirada al uso de lenguaje claro en el ámbito judicial latinoamericano. *Lengua i Dret*, (69), 119-138. <https://urbeetius.org/articulos-argumentacion-redaccion-juridica-y-lenguaje-claro/una-mirada-al-uso-de-lenguaje-claro-en-el-ambito-judicial-latinoamericano/>

Sanz, I. (2021). Las sentencias de 'lectura fácil', una traducción para personas con discapacidad que se implanta lentamente. https://www.telecinco.es/noticias/espana/sentencias-lectura-facil-traduccion-personas-discapacidad_18_3219047058.html

Suárez de los Santos, D. C. (Coord.). (2022). *Guía para elaborar sentencias en formato de lectura fácil dirigidas a personas con discapacidad intelectual*. Suprema Corte de Justicia de la Nación. <https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/Publicaciones/archivos/2022-12/Gu%C3%ADa%20para%20elaborar%20sentencias%20en%20formato%20de%20lectura%20f%C3%A1cil%20para%20pcd%20intelectual.pdf>